

El golpe y sus causas, catorce años después

No construir sobre el viento

De la noche que se cerró sobre el país aquel 27 de junio han pasado catorce años. Hoy, las huellas de la tragedia padecida están a cada paso: en la realidad económica, en las cadenas de la deuda, en las angustias de los desocupados o de quienes viven de su trabajo. Y aun más allá ¿quién de nosotros no encuentra, en los muros de la ciudad, o en las concentraciones de fin de semana en Plaza Libertad, sobre el corazón de Montevideo, los rostros de amigos cuyo destino, aunque presumimos, desconocemos?

Familiares y madres, sobre todo, han padecido diversas torturas que no figuran detalladas en los cursos que dictaron a la policía y las Fuerzas Armadas los especialistas en guerra antisubversiva. Después del atropello a los hogares, soportaron la tortura del peregrinaje por las dependencias militares. Luego, el silencio obligado y sin rutas, el ruego callado a Dios o al destino. De pronto una palabra, una pista vaga, que afirma la angustia que va ligada, siempre, a la tortura de la esperanza.

Con la anunciación de un tiempo nuevo, sobre la quiebra del régimen militar, retornaron los partidos. Que prometían, sin distinciones (en algo todos estaban de acuerdo), el esclarecimiento de los hechos.

¿Quién, sensatamente, podía negarse a ello?

No repetiremos los detalles de lo que ocurrió después. En primer término porque, simplemente como orientales, nos avergüenzan.

Digamos sólo lo esencial: apareció —entre gallos y medianoche— la ley que sus autores llaman de "caducidad de la pretensión punitiva del Estado". Casi únicamente ellos, porque muchos designan a las cosas por su nombre. La ley fue aprobada, mayoritariamente, por blancos y colorados. Rechazada por blancos, frenteamplistas, cívicos, y un legislador colorado, vino la respuesta: tres mujeres con dolor y coraje nacionales, plantearon el recurso constitucional del referéndum.

Hoy, la decisión está en lo que cada uno de nosotros haga ahora mismo. Si se obtienen las firmas —y esto tiene que ver con la organización y la tenacidad— el pueblo tomará, directamente, su decisión en las urnas.

Algunos prefieren adelantarse a desconocer tácitamente la soberanía popular, admitiendo que aquí mandan los que tienen las armas y que su voluntad es ley.

Otros pensamos que no es tan fácil avasallar a un pueblo.

En todo caso, no despreciamos a la opinión pública, e intuimos el destino de las instituciones —sean las que sean— que desacatan el resultado de un pronunciamiento popular.

Estas líneas sobre el más importante de los deberes de hoy, la recolección de firmas para que el pueblo decida, sin duda cobran nueva luz si analizamos, a partir del 14 aniversario del golpe, algunas de sus causas. Veamos sólo algunas, entre tantas posibles.

¿Qué política impuso la dictadura? ¿Cuáles fueron los rumbos de su orientación económica? Importa partir de aquí, porque sobre ello no hay dudas: ante todo se optó por la sagrada libertad económica (trampa que parte, como es notorio, de la afirmación de que no hay progreso sin lucro y sin propiedad individual de los medios de producción). Libre importación y libre exportación, contención de los salarios (porque la austeridad permitiría, según los teóricos al uso, acumular para redistribuir), desaliento del desarrollo industrial, desaliento de la actividad estatal, devaluación de la moneda. Que esa fue, en esencia, la orientación, lo gritan los hechos.

Pero mucho antes del 27 de junio de 1973 podemos comprobar que esa orientación económica no comenzó con la irrupción de los militares. Esa receta tiene nombre. Y no podía ser buena porque provenía —como observa Galeano— de donde viene la enfermedad.

Comenzó a aplicarse —con declarada oposición de los partidos de izquierda y del Partido Colorado— catorce años antes de los catorce de dictadura. Había llegado antes a Chile, a Colombia, a la República Argentina. Y arribó a estas playas acordada en las cartas de intención que exigían y exigen, como condición de los empréstitos, el Fondo Monetario y los prestamistas extranjeros.

Cuando se firmó, en esta tierra, la primera de esas cartas, se estaba formando —paralelamente— la central única de trabajadores. Es decir: se avizoraban, como se-

ñalara Viviani Trías, "tiempos de dificultades y miseria, pero también de lucha intensa y, por tanto, de fervientes esperanzas".

Dos concepciones tendían, cada vez más, a enfrentarse. Por un lado una orientación económica que acentuaría la dependencia, y la angustia de vastos sectores. Por otro, estos sectores, encabezados fundamentalmente por los que forjan, con el trabajo diario, la abundancia ajena.

A medida que la crisis se agravó, ambos polos acentuaron la pugna. Una realidad que no se registró sólo aquí. También se comprueba en las heridas de otros países de América Latina.

Adolfo Pérez Esquivel, al analizar esta etapa, la define por un rasgo: una crisis de hegemonía de las minorías privilegiadas que dominan en el sistema, crisis que culmina en regímenes militares que imponen, por la fuerza, recetas de miseria. Así, "la lógica del orden (con raíces en la doctrina de la seguridad nacional) sustituye al modelo clásico de legitimidad basado en el consenso de las mayorías".

El agravamiento de la situación trajo enfrentamientos, paros, represión, cárceles y tortura. Después de años durante los cuales el proceso se agudizó, el 13 de junio de 1968 se tomaron medidas de seguridad (que la constitución prevé sólo para los casos de agresión exterior o grave conmoción interior imprevista) que se mantendrían indefinidamente hasta los tramos finales de la dictadura militar. Quijano calificó a la política del gobierno de aquellos años, de "aventura frívola y suicida". Veinte días después del decreto del 13 de junio escribió: "Continúan vigentes las medidas de seguridad. Están intervenidos varios entes autónomos y los personales respectivos han sido movilizados, eufemismo que significa militarizados. Se ha dispuesto la congelación de precios y salarios, creado paralelamente delitos económicos, ordenado la prisión de los incursos en ellos, aplicado penas. En todos los casos por simple decreto, en todos los casos a pretexto de medidas prontas de seguridad". "Detrás de la prisión de uno —explicaba Quijano— vienen las de muchos. Detrás de la militarización de algunos vienen las de más. ¿Qué vamos a hacer del país? ¿Una prisión general? ¿Un vasto campo de concentración? ¿Un inmenso cuartel?"

No es necesario recordar otros aspectos que sumaban sombras al cuadro de la crisis: los viejos vicios políticos (corrupción, acomodados) el hábito de la tortura, la represión, la violencia desencadenada desde el poder. (Tiempo después, con el pretexto de perseguir al MLN desencadenaron el terrorismo de Estado).

De la realidad que vivió nuestra gente hay numerosos testimonios. Veamos algunos, como ejemplo:

A mediados de 1971, un legislador afirmó, en el Parlamento: "no he conocido nunca, y seguramente los más viejos de la cámara tampoco, tal vez ni siquiera se le encuentre hojeando en las páginas de la historia, un Gobierno más reiterativo en la trasgresión constitucional, más eufóricamente empecinado en demostrar que la Constitución vale para todos menos para él, en una especie de regreso a aquellos absolutismos donde las imposiciones del derecho regían para los súbditos y no para el gobierno". Quien reclamaba el juicio político y denunciaba éstas y otras realidades del gobierno del señor Pacheco Areco no era un legislador de izquierda o un integrante de los sectores que organizaban, ya, una fuerza política que se proponía cambios profundos. Era una insospechada figura del diario El País: el doctor Enrique Beltrán, entonces diputado del Partido Nacional.

Podríamos recordar aquí la prédica de Marcha, o diversas denuncias en la prensa, la Cámara de Representantes o el Senado, de destacadas figuras de distintos partidos. Alguien sintetizó —aun con respeto por la investidura del gobernante— su juicio sobre el señor presidente de entonces, afirmando: "si algún día, después que haya terminado su reinado, hay que resumir en una frase lo más característico de su gobierno, sin duda en esa lápida habrá que poner: con él empezó el odio". (Quien afirmaba esto era el entonces diputado Dardo Ortiz).

Si alguien tuviera alguna duda de la situación que vivía el país, podemos recordarle —entre otros testimonios— el del doctor Ramón Real, entonces decano de la Facultad de Derecho, a quien se

consultó —como jurista— sobre la realidad del país. En una larga y documentada exposición, el doctor Real sostuvo: "debo decir, con toda honestidad, que hemos llegado a un punto en que es posible preguntarse si el estado de derecho en nuestro país es una realidad o una ficción, una máscara más barata de denominación que el empleo de la nuda fuerza". Y agregó: "creo, sinceramente, esto último". (...) "Este es un régimen de facto surgido por deformación del régimen institucional vigente, y no cabe duda que es así".

El país había entrado en una etapa en la cual se habían desvirtuado en su esencia la separación de poderes, las garantías individuales, las relaciones del ser humano con el Estado, el concepto de que los poderes son limitados, de que no hay poderes absolutos; en definitiva, todo lo que constituye la estructura filosófica y esencial del régimen constitucional y del sistema de libertades y del Estado de derecho. No es ésta la conclusión personal de un militante de izquierda. Prácticamente fueron esas, también, palabras del diputado Enrique Beltrán en el pedido de juicio político al señor Pacheco.

Importa recordar estos hechos. Meditar, sobre ellos, con la serenidad que da el tiempo. Para ir, a fondo, en el planteo de las soluciones. Para dividirnos, como es necesario —sin mengua del respeto o la altura debida—, en torno a las concepciones del país que deseamos. Para llevar adelante, como la lealtad con el país y con el adversario lo indica, una política de enérgica y firme oposición a una línea económica que entendemos equivocada, que juzgamos continuista de males que hemos analizado. Y política de oposición —como señalaba Quijano— no significa ni transacción ni olvido; implica condena.

No se nos pasan por alto las dificultades de la reconstrucción democrática. Pero las inercias de una doctrina de la seguridad nacional que resultó nefasta para el país y para América Latina no pueden explicar, todavía hoy, que los documentos secretos de los servicios de información del ejército sigan calificando como "factor militar" la opinión y la actuación de los sectores políticos que no resultan gratos a los señores del imperio. Ni parece digno de la inteligencia del señor Ministro de Defensa restar trascendencia a esa monstruosidad porque habría sido elaborada por el ejército y no por las Fuerzas Armadas.

Importa, reiteramos, insistir en las diferencias de fondo si es que sentimos —todos, tirios y troyanos— la necesidad de enfrentarnos, sinceramente, en torno a soluciones e ideas.

Hay quienes insisten en fórmulas que otros —a nuestro juicio con razón— entienden superadas por la historia y condenadas, en sus aspectos esenciales, por los padecimientos del país. Danilo Astori ha comenzado ya, desde BRECHA, el análisis de los temas de fondo —comenzando por la realidad agraria— y de las soluciones posibles. Será el suyo uno de los aportes que BRECHA se ha propuesto para el debate de estos días. Quizá por ahí podremos contribuir, desde la modestia de esta tribuna, a la consolidación del bloque histórico para el cambio.

Un tema —con el que hemos comenzado estas líneas— preocupa hoy y en primer término al país: la posibilidad de un pronunciamiento popular en el referéndum. ¿Por qué? Porque los muertos y desaparecidos —volvemos a Pérez Esquivel— fueron consecuencia de un proyecto que intentó desarticular a los sectores populares. Ese proyecto, y los métodos que son su consecuencia necesaria, que le acompañan como la sombra al cuerpo, constituirían —con la impunidad— una amenaza sobre el futuro.

La dictadura impuso, hasta sus últimas consecuencias, una orientación económica que sólo pudo aplicarse por la fuerza. Si los métodos utilizados, las torturas, las violaciones de derechos humanos, las muertes y desapariciones no fueran investigados y los hechos definitivamente aclarados, sólo abriríamos cauce a la desesperanza. Y sobre el escepticismo generalizado no se afirma la democracia. Nada construiríamos sobre la arena de la desilusión.

También sobre estos temas es necesario dividir, con total sinceridad, los campos. Por respeto a la verdad, que es la mejor forma de respetar también a los que ofrendaron sus vidas —equivocados o no, aunque en muchos casos tuvieron nuestros mismos sueños—, para hacer, de este rincón, una tierra solidaria.

Guillermo Chifflet